Globethics Repository



El futuro de los partidos políticos en México [The future of political parties in Mexico]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Acosta Silva, Adrián
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-12 13:19:15
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218924

El futuro de los partidos políticos en México

Adrián Acosta Silva

La larga y accidentada transición mexicana que culminó en 2000 con el triunfo electoral del PAN y la derrota del PRI, significó el fin de un ciclo histórico de la política y la sociedad mexicanas. Las elecciones que se celebrarán en julio de 2003 serán las primeras en un régimen plenamente reconocido como democrático por todos los partidos. Se renovará la Cámara de Diputados y varios congresos estaduales, presidencias municipales y gubernaturas locales. La dimensión simbólica de la postransición, la experiencia de la alternancia, el comportamiento de las organizaciones, el costo público de la política, los efectos del sistema electoral sobre el sistema de partidos, y el papel de la política en las iniciativas económicas del nuevo régimen, forman algunos puntos del «mínimo irreductible» de temas que pueden configurar una visión del futuro de los partidos políticos en México.

Como muchas otras cosas, la prospectiva política no tiene una historia feliz en México ni en América Latina. Del mismo modo, los ejercicios de futurología de la vida social, y sus parientes más conocidos, las profecías y los pronósticos, han resultado casi siempre en un conjunto de fatalidades, paradojas y desvaríos que alimentan la certeza de que por lo general el futuro es un territorio ingobernable, habitado por una bestia apocalíptica a la que hay que domar de algún modo. Habituados –condenados, según quiera verse– a vivir en lo que Norbert Lechner denominó hace poco más de tres

Adrián Acosta Silva: doctor en Ciencia Política por Flacso-México; profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara; miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México; jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del Cucea, Universidad de Guadalajara; @: <aacosta@cucea.udg.mx>.
Palabras clave: sistema político, partidos, México.

lustros «un presente continuo»[1], las clases políticas de las sociedades latinoamericanas transcurrieron en los últimos 20 años en un contexto de crisis y recuperaciones efímeras, ciclos largos o cortos de inestabilidad política, e intensificación de la desigualdad económica y la fragmentación social. En esas circunstancias, la producción de hipótesis de futuros es una tarea compleja, donde el juego de los escenarios probables, deseables y posibles resulta una labor sujeta a múltiples contingencias y restricciones teóricas, metodológicas y aun epistemológicas. Ello no obstante, la labor de prognosis y prospección se erige continuamente como un desafío fascinante ya no para construir mejores escenarios futuros para la región, sino fundamentalmente para tratar de evadir o eludir los «peores escenarios de futuro», según se señala recientemente en un texto relacionado con el tema prospectivo[2].

A esta dificultad conceptual y técnica de los estudios del futuro también hay que añadir la sensación de que el tiempo histórico parece acelerarse dramáticamente en el contexto de la globalización y la emergencia de nuevos fenómenos en los distintos campos de la vida económica, política y sociocultural. Pero esa percepción de compresión del tiempo convive con la prórroga de las viejas herencias de bárbara desigualdad y pobreza extendida que priman en el campo social y económico de nuestras sociedades, en iguales o peores niveles a los que hace ya dos décadas produjeron por lo menos otras tantas generaciones de políticas de ajuste y reestructuración económica y varios procesos de democratización política –cuyos resultados son, hasta ahora, decepcionantes, muy débiles e inestables. Los esfuerzos entonces por vislumbrar algún tipo de futuro están ceñidos sin piedad ni remedio a la dictadura de la coyuntura y a la maldición del cortoplacismo de la clase política y las elites económicas latinoamericanas. Argentina, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela representan los ejemplos dramáticos de cómo la incertidumbre, esa extraña sensación de ausencia de futuro, es la marca en la frente de las sociedades contemporáneas de la región, una marca elaborada pacientemente en el transcurso de las últimas tres décadas.

México no escapa por supuesto a esa vieja maldición –¿tradición?– latinoamericana. Hace apenas dos décadas, por ejemplo, era muy difícil vislumbrar algún futuro, y menos optimista, en el campo de la política mexicana, atrapa-

1. Norbert Lechner: «Reflexiones sobre estilos de desarrollo y visiones de futuro» en Enzo Faletto y Gonzalo Martner (coords.): *Repensar el futuro. Estilos de desarrollo*, Nueva Sociedad / Unitar / Prpfal, Caracas, 1986.
2. Francisco López Segrera y Daniel Filmus (coords.): *América Latina 2020. Escenarios, alternativas, estrategias*, Flacso / Unesco / Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, 2000.

dos como estábamos en el inicio del gran túnel de la crisis abierto por la cuestión de la deuda externa y continuado hacia la reestructuración neoliberal de la economía, que confirmaba el fin de la era dorada del desarrollismo y fortalecía el carácter autoritario de un régimen político basado en un virtual monopartidismo que lograba sobrevivir a los tímidos intentos por liberalizar las reglas básicas del régimen posrevolucionario mexicano. Hoy mismo, luego de una larga transición multifronte ocurrida en la década de los 90 que comenzó en 1988, cuando contamos con un régimen político democrático aunque de una apariencia que en ocasiones se aprecia francamente lamentable, cualquier intento de prospección que visualice escenarios probables y posibles del futuro (hipótesis de futuros), tendría que detenerse en las principales tensiones y tendencias que habitan este presente continuo al que nos hemos acostumbrado luego de varios años de sobresaltos, asombros y sorpresas políticas y sociales.

Abrumados por los pequeños y grandes escándalos que surgen todos los días, por acontecimientos que sacuden a las instituciones políticas y desafían la racionalidad o la imaginación de los actores y los grupos de poder, en México nos hemos venido acostumbrando desde hace un tiempo a pensar que en el campo de la política el largo plazo es un tiempo imposible, un territorio ingobernable, una fantasía. El tablero del ajedrez político mexicano que se ha construido en los últimos años con paciencia espartana por los partidos políticos y el presidente Vicente Fox, pero donde también ha sido posible observar las manos invisibles y enguantadas de empresarios, medios y cardenales, se ha vuelto un juego predecible y, en ocasiones, un teatro del absurdo. Las grandes expectativas acumuladas durante dos décadas alrededor del cambio político y la alternancia en el poder, bien pronto se han transformado en desconfianza, irritación, malestar, y en algunos casos una sensación de traición parece haberse adueñado del ánimo de quienes hasta hace no mucho tiempo sentenciaban, con seguridad envidiable, que con la salida del Partido Revolucionario Institucional del Palacio Nacional comenzarían a resolverse, ahora sí, los grandes problemas nacionales.

El supuesto de base de las notas siguientes es que el futuro de los partidos políticos en México está estrechamente asociado a las formas que asuman tanto el sistema de partidos como el de la configuración de la representación y la participación política de los ciudadanos. Ambas requieren fundamentalmente de una institucionalidad que reduzca la incertidumbre a la que está condenado esencialmente cualquier régimen democrático, de instituciones normativas y políticas que impriman eficacia, confianza y credibilidad a la

acción política y a sus actores principales, los partidos. Cualquier hipótesis de futuros posibles y deseables tiene que considerar a las instituciones como el centro de gravedad del régimen político, que garantice que la joven democracia mexicana y la política misma sobrevivan a las ocurrencias, dislates e irresponsabilidades de sus actores, los que están organizados en partidos y los que hoy, por diversas razones, no lo están. En este marco, se proponen seis racimos de problemas o temas que forman parte del régimen político mexicano de la postransición, racimos que son una mezcla de desafíos, tensiones y tendencias de cuya resolución dependerá en buena medida el futuro de los partidos políticos, más allá de que los dioses del azar o de la incertidumbre intervengan para modular el sentido específico del cambio y de sus resultados o expresiones empíricas.

El riesgo de una democracia sin memoria

La Revolución mexicana fue, entre otras muchas cosas, el gran mito fundacional sobre el que se construyó el México moderno. Un mito creado por la facción triunfante de un movimiento armado –el «grupo Sonora»– que nutrió una clase política revolucionaria aglutinada, desde 1929, en un partido hecho a la medida de los intereses de los grupos vencedores, que posteriormente varias generaciones de políticos usaron para monopolizar los espacios y canales de representación, y garantizar también el monopolio de los puestos públicos[3]. En los márgenes derecho e izquierdo del régimen posrevolucionario fueron situados imaginaria y realmente los opositores, y ello significó su virtual exclusión de las arenas de la política nacional. Cinco décadas transcurrieron con el ejercicio de un poder formidable centrado en el Estado de la Revolución y su hechura política, el PRI. Alrededor del hiperpresidencialismo se concentraron todas las redes imaginarias, materiales y hasta financieras del poder político. Pero el mito comenzó a palidecer desde finales de los años 80, y para los 90 el discurso sobre la Revolución fue sustituido por el de la *modernización*, según el reconocimiento de las propias elites políticas surgidas con el salinismo (1988-1994), de que la Revolución ya no era un referente válido ni suficiente para explicar el predominio del PRI, en el contexto de formación de un régimen de partidos que rápidamente mostraba

3. Como se sabe, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), luego transformado en el actual PRI, que gobernó en México desde las elecciones de 1929 hasta el año 2000, cuando perdió la presidencia frente al Partido Acción Nacional (PAN). Para un análisis del «grupo Sonora» hay que referir el indispensable texto de Héctor Aguilar Camín: *La frontera nómada. Sonora y la Revolución Mexicana*, SEP, México, 1985; y para un análisis de las sucesivas transformaciones del PRI, v. Luis Javier Garrido: *El Partido de la Revolución Institucionalizada. La formación del nuevo Estado en México (1928-1945)*, SEP, México, 1988.

signos de competencia electoral y cambio en las preferencias políticas de los ciudadanos. En las elecciones federales de 1997 y sobre todo de 2000, la Revolución terminó por desaparecer del discurso y el imaginario políticos, inclusive del PRI. Sin embargo un mito está tratando lentamente de sustituir a otro. Es posible advertir cómo en ciertas franjas del nuevo oficialismo político, el *foxismo* –ese movimiento civil y electoral encabezado por la figura carismática de Fox– intenta ser presentado como una suerte de nuevo mito fundacional para fortalecer la idea del inicio de una nueva época política. Por supuesto, no es una operación extraña en el mundo de la política moderna, sino justamente un recurso ideológico de legitimación que cualquier partido en el poder como el Partido Acción Nacional (PAN) puede utilizar para reforzar su dominio, aunque sepamos que, a diferencia del PRI, el PAN no es un partido que *nació* en el poder, sino una organización que compitió y ganó su derecho a ejercerlo, jugando el papel de «oposición leal» durante 60 años[4]. Ello no obstante, la amnesia histórica tiene el riesgo de volver en comedia lo que una vez fue ritual celebratorio y fuente de identidad. El futuro de los partidos políticos es tratar de vivir como los modernos, es decir, una historia sin mitos fundacionales, sino con instituciones que garanticen la estabilidad y propicien el cambio político, disminuyendo la posibilidad de rupturas y fracturas irreparables. No perder y recuperar la memoria histórica es parte de los esfuerzos de cualquier esbozo de futuro democrático, y los partidos políticos juegan un papel insustituible en ese ejercicio, aunque bien sepamos que en un país de políticos amnésicos, cualquier tuerto puede llegar a ser rey.

Los patios interiores de los partidos y su dimensión organizativa

Nunca como ahora los ciudadanos y los medios de comunicación habían puesto tanta atención en cómo funcionan los partidos políticos mexicanos. Las elecciones locales y federales entre 1988 y 2000 estuvieron marcadas por una gran movilización dentro y alrededor de los partidos, y las primeras experiencias de alternancia política ocurrieron justamente cuando estas organizaciones compitieron bajo circunstancias de equidad y legalidad en términos electorales[5]. Sin embargo, las elecciones primarias no suscitaron atención en los años 90, sino que la atención se concentró específicamente en

4. El PAN fue fundado en 1939, con una matriz que combinó desde un principio ideas conservadoras y católicas. Para un análisis de su origen, evolución y papel como oposición política en el marco del largo régimen autoritario mexicano, cf. Soledad Loaeza: *El Partido Acción Nacional: la larga marcha*, FCE, México, 2000.
5. Al respecto, cf. R. Becerra, P. Salazar y J. Woldenberg: *La mecánica del cambio político en México*, Cal y Arena, México, 2000.

los resultados de la competencia interpartidista. Pero las cosas comenzaron a cambiar hacia 1999, cuando entre medios, partidos de oposición y ciudadanos se extendió la sensación de que el PRI podía ser derrotado en las presidenciales de 2000. Los procesos intrapartidistas que llevaron a la conformación de dos grandes alianzas encabezadas por Vicente Fox y el PAN (Alianza por el Cambio), de un lado, y por Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD (Alianza por México) por el otro, y el propio proceso interno del PRI para la selección de su candidato presidencial, por vez primera sin la intervención del presidente en funciones (en este caso Ernesto Zedillo), y en votación abierta para militantes y ciudadanos, modificaron los énfasis en la atención al interior de los procesos de elección primaria en todos los partidos políticos. El conocimiento de los candidatos y principales dirigentes de los partidos, también fue suscitando interés por saber cómo eran electos o designados, y cuáles los estilos, procedimientos y mecanismos que permitían la elección interna y sus efectos cohesivos o disruptivos en los distintos contextos partidistas.

Ello fue confirmado con los procesos de elección interna que realizaron estos tres partidos en el primer trimestre de 2002, que mostraron sus límites y dificultades para adaptarse a un entorno político que continuamente genera exigencias y desafíos para las cuales los partidos no tienen capacidades o recursos suficientes con que responder. Un conjunto de equilibrios inestables se alimentan de los vacíos de participación y representación al interior de los partidos, aunque en cada caso esos equilibrios tengan trayectorias y problemas diferentes. El elitismo democrático del panismo que llevó a la reelección de Luis Felipe Bravo Mena como presidente partidario, demostró sin duda su eficacia como dispositivo para elegir la dirigencia nacional. Sin embargo quién sabe si ese mecanismo restringido y exclusivo pueda seguir manteniéndose en un contexto de participación e interés creciente de sus militantes y simpatizantes ahora que es el partido en el poder, el representante del nuevo oficialismo político. Por su parte, el priismo, en la imaginaria oposición entre «aparato» y «bases» que significó el enfrentamiento entre Beatriz Paredes y Roberto Madrazo, con el apretado y cuestionado triunfo de éste, mostró las tensiones corrosivas que habitan las prácticas autoritarias y corporativas que aún persisten en el corazón secreto del reloj de la política partidista, y también en julio de 2000, en ocasión de la pérdida de la espina dorsal del partido, la presidencia del país, había provocado en muchos sectores de la opinión pública la sensación de la próxima extinción del partido que nació como el gran ordenador político de la Revolución mexicana. El PRD, por su parte, con la polémica elección de Rosario Robles como representante del neocardenismo, sobrevivió a un proceso electoral lleno de irregularidades y desmesuras,

con una organización que en ocasiones es una mezcla fatal del viejo populismo priísta con las prácticas asambleístas de la izquierda setentera mexicana.

En los tres casos, las tensiones internas de los partidos estuvieron marcadas por la ausencia de reglas claras para el desempeño de sus dirigentes y militantes; el diseño o fortalecimiento de aquéllas debe estar orientado hacia un mínimo común organizativo que asegure legitimidad y eficacia en la toma de decisiones y en la elección de liderazgos. Hay aquí una pregunta central para el debate presente y futuro: ¿debe haber una instancia externa a los partidos (el Instituto Federal Electoral, IFE) que regule y sancione el cumplimiento de ciertos principios democráticos en la elección de sus dirigentes?; ¿las elecciones primarias deben ser supervisadas por este organismo? Si ello es así, ¿no se estará sobrecargando al IFE de demandas y funciones que amenazan su legitimidad y eficacia?

La pluralización y los impulsos hacia la fragmentación

Otro de los racimos temáticos del futuro político tiene que ver con el riesgo de transitar de la actual pluralización de los intereses y de las organizaciones hacia el terreno baldío y fangoso de la fragmentación y pulverización políticas. Hemos pasado rápidamente de un cuasi monopartidismo histórico a una situación de multipartidismo teórico con un tripartidismo práctico, y en ese tránsito se ha fortalecido la idea, correcta, de que la pluralidad es un componente esencial y deseable de un régimen democrático. Para una sociedad donde hasta no hace mucho se acostumbraba pensar que todos los mexicanos éramos desde que nacíamos guadalupanos y priístas, en ese orden, el reconocimiento y el impulso del carácter plural de la sociedad permitió fortalecer un sistema de partidos y organizaciones políticas que representan un amplio mosaico de creencias e intereses. Ello no obstante, la pluralidad también debe traducirse en eficacia política, mediante la construcción de estrategias cooperativas que resuelvan los temas públicos en acciones y resultados. Por el contrario, lo que hoy tenemos es una tendencia dura hacia la fragmentación que se expresa en juegos no cooperativos que llevan frecuentemente a la parálisis política, y a típicos juegos de suma cero, que ejemplifican con claridad el fracaso de la iniciativa presidencial de reforma fiscal de este año, o la iniciativa de la ley indígena de 2001, dirigida a dar respuesta institucional a los reclamos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Y aunque ya se sabe que el presidencialismo es una forma donde los partidos de oposición tienen pocos incentivos para cooperar con el partido del Ejecutivo, también es cierto que un sistema de partidos moderado (el *tamaño* del sistema),

puede permitir una mejor gobernabilidad política, más eficiente y representativa de los intereses comunes, en un formato presidencial[6].

En la última elección federal, de 2000, la Alianza por el Cambio, encabezada por el PAN y el actual presidente Fox, obtuvo 43% de la votación total, mientras que el PRI alcanzó 36% y la Alianza por México, de Cárdenas, 17%. Pero vista la representación legislativa tuvo un resultado diverso: en el Congreso el PRI obtuvo 39,9% de la votación, que se tradujo en 209 escaños en la Cámara de Diputados (42% del total), mientras que el PAN, con 38,3% de los votos ganó 208 asientos (41%), y el PRD con 18,6% obtuvo 47 puestos (9%). Hay que recordar que estos dos últimos partidos compitieron en coalición con partidos pequeños (el PVEM en el caso del PAN, y el PT, CD, PAS y PSN, en el del PRD), que sin duda resultaron el ejemplo típico de «gorrones» electorales, pues con 3% de los votos conquistaron 36 escaños en el Congreso, es decir, 8% del total[7]. Esos resultados confirman no solo que desde 1997 se comenzó a experimentar el fenómeno de gobierno dividido (un congreso donde el partido del presidente no es mayoría), lo cual ha dificultado enormemente las tareas del Gobierno y la gobernabilidad del país, sino el riesgo de que las reglas electorales favorezcan marginalmente a un conjunto de pequeñas agrupaciones políticas sin representatividad nacional específica[8].

Representación, participación y gobernabilidad democrática

Parece claro que hasta ahora ningún único partido aspira a conquistar el monopolio de la representación política; es una de las lecciones maestras del pasado político mexicano, uno de sus puntos de no retorno (aunque desde luego... nunca se sabe). Pero también parece claro que un sistema multipartidista amplio no podrá conjugar adecuadamente participación, representación y gobernabilidad, esos temas tan cercanos a lo que llamamos «consolidación democrática»[9]. Por lo que nos dice la literatura y la experiencia internacional al respecto, un amplio número de partidos que participan en el régimen político en un formato presidencialista, debilitan no solo el poder presiden-

6. Al respecto, cf. Scott Mainwaring y M.S. Shugart (comps.): *Presidencialismo y democracia en América Latina*, Paidós, Buenos Aires, 2002.
7. Los cálculos están basados en las cifras electorales que aparecen en la página del IFE: <htpp//www.ife.org.mx/resultados>.
8. Para una visión histórica y comparativa del fenómeno del gobierno dividido en México, cf. María Amparo Casar e Ignacio Marván (coords.): *Gobernar sin mayoría. México, 1867-1997*, CIDE-Taurus, México, 2002.
9. Andreas Schedler: *Taking Uncertainty Seriously: The Blurred Boundaries of Democratic Transition and Consolidation*, Cuadernos de Trabajo Nº 1, Departamento de Estudios Políticos, Cucsh / Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1/2002.

cial sino también el del Congreso. Así, una mayor cantidad de partidos y organizaciones políticas no significa necesariamente aumentar la calidad de la representación política; incremento que no favorece las capacidades y virtudes de un régimen presidencial. Fijar límites al sistema de partidos, imponer mayores restricciones para el registro de nuevas organizaciones y ajustar los procesos de manera que se traduzcan en una mejor participación y una mayor calidad de la representación política, evitará o reducirá la aparición de partidos-negocio como los que ahora padecemos, auténticos gorrones (*free riders*) que se benefician de una legislación electoral que requiere ser sujeta a una nueva generación de reformas.

En este sentido, una de las paradojas más claras del proceso de formación de un sistema de partidos ha sido la pérdida de la *calidad* de la representación política. Muchas encuestas recientes han mostrado señales duras de que los ciudadanos no se sienten representados en el Congreso federal ni en los congresos locales, lo que expresa una señal muy clara de distanciamiento entre partidos, electores y ciudadanos[10]. El desencanto político propio de una primera generación de reformas democráticas ha comenzado a extenderse entre amplias franjas de la ciudadanía, desencanto que tiene que ver no solamente con la débil incorporación de sus intereses a la agenda de los partidos políticos con representación parlamentaria, sino también con la existencia de un temario cruzado entre partidos y ciudadanos. La debilidad de las asociaciones políticas «secundarias», como las llaman Cohen y Rogers, parece estar en el centro explicativo de este fenómeno[11]. Además de ello, hay que agregar también los desafíos de la consolidación democrática y las tensiones económicas que subyacen a la sensación de malestar que rodea la acción pública.

El maldito factor financiero de los partidos: ¿del Estado al mercado?

¿Deben los partidos políticos seguir dependiendo de los recursos públicos? Parece existir cierto consenso alrededor de la idea de que deben dejar de pertenecer al presupuesto estatal para pasar a depender de los recursos

10. Una y otra vez las encuestas y sondeos de opinión muestran evidencia empírica del distanciamiento entre los ciudadanos y los partidos políticos, revelador no solo de viejos problemas de desafección política y bajos niveles de cultura cívica, sino del incremento de la desconfianza y el escepticismo ante las promesas e instituciones de la joven democracia representativa mexicana. Al respecto, cf. José Woldenberg: «Consolidación democrática y cultura política» leído en el «Coloquio para el análisis de las Encuestas Nacionales sobre cultura política y prácticas ciudadanas», Ciudad de México, 14 de agosto de 2002.
11. J. Cohen y J. Rogers: «Asociaciones secundarias y gobierno democrático» en *Zona Abierta* Nº 84/85, Madrid, 1998, pp. 3-122.

privados. Es un consenso aparente, alimentado con generosidad por ciertas elites económicas, políticas y hasta intelectuales, que hace circular la idea de que los partidos políticos mexicanos son un gasto público innecesario, un barril sin fondo que no debe tratar de llenarse con recursos públicos. En esta perspectiva, de lo que se trata es de desaparecer o por lo menos reducir drásticamente el subsidio estatal a los partidos para que busquen fuentes de financiamiento alternas entre los particulares. En otras palabras, los partidos deben trasladar su financiamiento del Estado al mercado, con el propósito de que la democracia mexicana pueda descansar menos en los recursos públicos y más en los privados. Muchas voces, con poder específico en el mundo de los negocios y de la política, exigen que el Estado deje de financiar a los partidos. Sin embargo la experiencia internacional muestra otra vez que el financiamiento no es una cuestión dicotómica sino de grado; no es un asunto de mercado versus Estado sino de cuánto participa el Estado o cómo interviene el mercado. En cualquier caso, parece necesario recordar, primero, que la denominación de los partidos como organizaciones de interés público ha respondido a una cuestión de Estado, en tanto mecanismo que propicie la estabilidad política y la competitividad electoral, una inversión pública, digamos, para conservar el orden político y la democratización del régimen. Pero también es necesario reconocer que ha llegado el momento de disminuir sustancialmente el monto y la proporción de los recursos públicos, para dejar que los partidos sean financiados por sus militantes y simpatizantes, asegurando siempre criterios de transparencia y equidad en el monto y origen de esos recursos. Este es uno de los puntos álgidos del debate por los dineros públicos.

La política de las políticas económicas

Quizá el gran desafío del futuro de los partidos será cómo transformar la fuerza política en decisiones de política económica. Los riesgos de la vieja y nueva economía presidencial de Los Pinos (residencia del presidente de la República), terminaron por subordinar las decisiones de política económica a los criterios y ocurrencias del Príncipe de turno. En este sentido parece necesario recuperar la noción de que solo una sólida coalición política basada en el acuerdo y la negociación interclasista e interelitista, permitirá el crecimiento económico y la distribución equitativa de sus beneficios, en una sociedad donde la bárbara desigualdad es, hoy como ayer, el eje de articulación y explicación de buena parte de los problemas de injusticia y bienestar del país. En ningún país del mundo con experiencias exitosas de crecimiento y distribución, se ha podido demostrar que solo las fuerzas del mercado pueden garantizar una mejor y más eficiente distribución de los recursos. Es la inter-

vención del Estado, basada en una coalición política sólida entre varias fuerzas políticas, asentada alrededor de ciertas ideas y programas, la que ha permitido crear sistemas de bienestar que reducen, en ocasiones dramáticamente, los rezagos y las herencias negras de pobreza y marginación. La necesidad de vincular la política con las políticas económicas es una tarea fundamental del Congreso y de los partidos, un punto de la agenda que, conviene recordar, permitió al país dejar de ser una sociedad de pueblos pulqueros para transitar hacia la industrialización (así fuera trunca o inconclusa) y, finalmente, hacia la democratización política. El acuerdo, esa flor delicada y exótica de toda democracia, necesita ser cultivado ahora y en el futuro por los partidos y traducido en términos de crecimiento, bienestar e incremento de las libertades de los ciudadanos. Pero ello requiere, nuevamente, no solo de una buena disposición al consenso por parte de los principales actores –aunque eso ayuda– sino que exista una clara disposición a fijar prioridades en la agenda gubernamental tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

Estos seis racimos temáticos están en el centro de casi cualquier tipo de agenda que pueda proponerse para el futuro de los partidos en México, el mínimo irreductible de cuestiones que tarde o temprano tendrán que abordarse por las organizaciones políticas, el Ejecutivo y el Congreso. Las elecciones federales de 2003, donde se jugará la renovación parlamentaria, serán clave para delimitar no solo la fuerza de cada partido y las nuevas relaciones de equilibrio que de ello resulten, sino también cómo dicha agenda será configurada empíricamente por la fuerza de los votos, pero muy seguramente, me temo, sin brillantez de ideas. Como máquinas de intereses que son, los partidos mexicanos perfilan una feroz confrontación por votos escasos y caros, como en todos lados, cuyo resultado muy probablemente no resolverá los problemas de gobierno en el corto y mediano plazo. Una nueva institucionalidad que vaya más allá de lo electoral es necesaria para reducir los riesgos y los costos de una democracia que parece sufrir ya, de acuerdo con el desempeño del nuevo régimen, de una suerte de «síndrome de envejecimiento prematuro».